



Poder Judicial de la Nación

## JUZGADO FEDERAL DE CAMPANA

SENTENCIA DEFINITIVA

Expte. N° 24358/2024

MUNICIPALIDAD DE PILAR c/ MINISTERIO DE ECONOMIA DE LA  
NACION - SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO s/ AMPARO LEY  
16.986

Campana, de mayo de 2025.-

### VISTOS:

Para resolver las presentes actuaciones caratuladas: “  
MUNICIPALIDAD DE PILAR c/ MINISTERIO DE ECONOMIA DE LA  
NACION - SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO s/ AMPARO LEY  
16.986”, expediente N° 24358/2024 del registro de la Secretaría Civil N° 2 de  
este Juzgado Federal de Campana, del que

### RESULTA:

1. Que a fojas 15/27 se presenta el apoderado de la Municipalidad de Pilar y promueve acción de amparo contra el Ministerio de Economía de la Nación - Secretaría de Industria y Comercio, solicitando la inconstitucionalidad de la Resolución N° 267/2024 por causar un gravamen irreparable a los derechos constitucionales del municipio. Además, solicita el dictado de una medida cautelar suspensiva.

Sostiene el derecho manifiesto e incuestionable del Municipio de Pilar de percibir la Tasa de Servicios Generales (antes Tasa Municipal de Alumbrado Público), incorporando la misma a la boleta individual emitida por EDENOR SA, y la Tasa por Vigilancia, Inspección y Desarrollo de Emprendimientos para la Provisión del Servicio Público de Gas por Redes, incluyendo ésta en la boleta individual emitida Naturgy BAN S.A.

Indica que la percepción de la Tasa de Servicios Generales, mediante el mecanismo de incorporación a través de la boleta individual emitida por la prestadora a cada usuario eléctrico del Municipio de Pilar, es



#39296985#456049611#20250521081143953

autorizada expresamente por la Ley provincial Nro. 10.740, la que se complementa con la Ley provincial 11.769 (art. 78).

Pone en conocimiento que el Municipio actor celebró un convenio con Edenor SA a partir del cual, esta última gestiona la percepción bajo mandato municipal de la Tasa de Servicios Generales, incorporando la mismas a las boletas de consumo eléctrico.

A fin de dimensionar el daño que podría causar la norma impugnada, describe la tasa en cuestión, su destino y contraprestación, destacando que la misma no ha sido objeto de cuestionamiento alguno y que la resolución dictada no ha medido las consecuencias y los derechos individuales que conculca tales como: derecho a la vida, a la salud, a la integridad física y a la seguridad.

Respecto de la Tasa por Vigilancia, Inspección y Desarrollo de Emprendimientos para la Provisión del Servicio Público de Gas por Redes, expresa que la misma fue creada en el año 2009 mediante la Ordenanza Fiscal de ese año y, a la fecha de la demanda, se encuentra regulada por la Ordenanza Fiscal del año 2024, y que cumple un rol esencial para las inspecciones efectuadas a las redes de circulación y suministro de gas natural, lo cual resulta primordial debido a la peligrosidad potencial que las mismas poseen.

Asimismo, manifiesta que la citada Ordenanza Fiscal de 2024, en uso de las facultades que le son propias al Municipio, designa a la empresa prestataria Naturgy BAN SA como agente de retención.

Resalta que el Municipio de Pilar no posee un afán recaudatorio para llenar sus arcas públicas, sino que cada tasa percibida se traduce en una contraprestación real, en una acción concreta del Estado Municipal allí donde sea requerida.

Seguidamente, hace referencia a la autonomía municipal a cuyos términos me remito en honor a la brevedad, y concluye en que cualquier restricción a la posibilidad de percepción de tasas municipales, impidiendo las herramientas que sustentan la misma, debe ser tomado como una





Poder Judicial de la Nación

## JUZGADO FEDERAL DE CAMPANA

afectación al principio constitucional de autonomía municipal por contrariar los artículos 5° y 123 de la Carta Magna.

Por otro lado, sostiene que con la cuestionada e inconstitucional resolución 267/24 se ha buscado evitar poder incluir, en la boleta de consumo de energía eléctrica, la tasa de alumbrado público (en el caso del municipio de Pilar la Tasa de Servicios Generales), y en la boleta de consumo de gas natural, la Tasa por Vigilancia, Inspección y Desarrollo de Emprendimientos para la Provisión del Servicio Público de Gas por Redes; para impedir o dificultar su percepción, enfatizando que dicho sistema ha resultado exitoso a través de los años, y ha permitido percibir con mayor éxito las tasas que sostienen los servicios públicos brindados por el Municipio.

Además, aclara que no se vulneran derechos propios de los consumidores, dado que la información brindada al contribuyente, en cuanto al valor del servicio eléctrico o de gas, es clara y precisa, así como la que se corresponde con lo percibido en concepto de tasa municipal.

Finalmente, considera que se encuentran reunidos los requisitos procesales para la admisión de la acción de amparo, solicita el dictado de una medida cautelar, ofrece prueba y peticiona que se decrete la inconstitucionalidad de la Resolución 267/2024 dictada por la Secretaría de Comercio e Industria de la Nación, dependiente del Ministerio de Economía.

2. Que a fojas 176, previa vista conferida al Sr. Fiscal Federal respecto de la competencia, se concede una medida cautelar interina ordenándose la suspensión de los efectos de la Resolución 267/2024 dictada por la Secretaría de Comercio e Industria de la Nación, hasta tanto se resuelva la medida cautelar solicitada por la actora, a cuyos fines se requirió al Ministerio de Economía de la Nación - Secretaría de Industria y Comercio que produzca el informe previsto por el artículo 4 de la ley 26.854.

3. Que a fojas 226 se hace lugar a la medida cautelar solicitada por la actora ratificando la medida interina, ordenando la suspensión de los



efectos de la Resolución 267/2024 dictada por la Secretaría de Comercio e Industria de la Nación, por el término de seis (6) meses, el que fue prorrogado a fojas 641 por el mismo plazo.

Asimismo, a fojas 465 se amplía la citada cautelar ordenando la suspensión de los efectos de las RESOLUCIONES 708/2024 del ENRE y 625/2024 del ENARGAS, dictadas con fundamento en la Resolución 627/2024 de la Secretaría de Comercio e Industria.

Cabe señalar que las citadas resoluciones fueron apeladas por la demandada y los Entes Nacionales y, hasta el día de la presente, el Tribunal de Alzada no se ha expedido al respecto.

4. A 180/194, el apoderado del Estado Nacional - Ministerio de Economía, produce el informe previsto en el art. 8 de la Ley 16986.

En primer lugar, niega todos y cada uno de los hechos que no sean de reconocimiento expreso en su responde.

Sostiene que el planteo efectuado por la actora resulta erróneo e infundado dado que, bajo ninguna circunstancia, la Resolución dictada impide, prohíbe o inhibe la percepción de las tasas en cuestión, por parte del Municipio de Pilar, ya que no sólo carece de competencia, según sus propias facultades y atribuciones para ello, sino que -además- si la norma nacional pretendiese tal circunstancia, violentaría el federalismo y el orden constitucional invocado en la presentación.

Expone que la Resolución N° 267/2024 fue dictada con basamento en las facultades y atribuciones inherentes a la autoridad de aplicación y con espíritu en el artículo 43, inc. a) de la Ley 24.240, instando a que cese la facturación “conjunta”, “fusionada” en un mismo documento, respecto de cargos o tasas que resulten ajenos a la naturaleza y prestación del servicio, toda vez que importa claras inobservancias a los derechos y garantías que tutelan los derechos de los usuarios y consumidores previstos en el Art. 42 de la CN y la ley 24.240.

Resalta la resolución atacada implica una adecuación de la modalidad para el cobro de las tasas municipales, que de ningún modo





Poder Judicial de la Nación

## JUZGADO FEDERAL DE CAMPANA

significa una desfinanciación ni perjuicio alguno de carácter patrimonial o de otra naturaleza; como tampoco una vulneración de los derechos del municipio ni un avance sobre su autonomía.

Enfatiza que la norma cuestionada no inhibe ni prohíbe la percepción de tasas o cargos dispuestos por normas provinciales o municipales y que la facturación de las tasas municipales puede (y debe) ser efectuada por separado, a cada usuario, como sucede en muchas jurisdicciones del país,

Transcribe el artículo 42 de la CN y en base a ello señala las previsiones constitucionales consideradas para el dictado de la Resolución 267/2024, detalle al que me remito brevitatis causae.

Concluye en que el dictado de la Resolución atacada no afecta la autonomía municipal ni avanza sobre sus capacidades, facultades, atribuciones y competencias que le son inherentes, y que busca ponerle un coto a la palmaria vulneración de los derechos de los usuarios en esa suerte de doble carácter usuario-contribuyente; incluso en los casos en los que la tasa es un porcentual del consumo del bien o producto, de manera que esa alícuota deviene en una especie de consumo gravado.

Con relación a jerarquía normativa establecida por el art. 31 de la CN, manifiesta que el art. 42 de la Constitución, reconoce y protege especialmente los derechos de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, y que las disposiciones de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor (y sus modificatorias) junto al plexo normativo concordante, fueron dictados en virtud de ello. Consecuentemente, tanto la normativa provincial como las ordenanzas municipales invocadas por la amparista, no pueden colisionar con tales disposiciones de rango constitucional.

Respecto al interés público comprometido, argumenta que la Municipalidad adopta un temperamento que resulta altamente dañoso para el colectivo que habita en su territorio, y recuerda que el sistema de protección de los usuarios, consumidores y otros actores del mercado se conforma por un conjunto de normas homogéneas; consistentes, con cohesión y coherencia entre sí que forman un plexo normativo global y



sistémico en defensa de sus derechos; fomentando conductas consumeriles sanas; la sana competencia y buenas prácticas comerciales.

Que en tales condiciones, la declaración de inconstitucionalidad de la Resolución 267/2024 importaría la obstrucción del cumplimiento de una acción estatal encaminada a garantizar derechos de usuarios y consumidores reconocidos en la Constitución Nacional, y que, en virtud de ello, el planteo de la actora carece de sustento fáctico suficiente para que la acción prospere.

Expone las razones que tornan jurídicamente improcedente la acción de amparo intentada, fundando cada una de ellas.

Finalmente, se opone a la prueba ofrecida por la actora, hace reserva del caso federal y solicita que se rechace la pretensión de inconstitucionalidad, con costas a la actora, haciendo cesar los efectos suspensivos de la norma atacada.

5. A fojas 415/419 se presenta el apoderado de EDENOR SA, solicitando ser tenido como tercero interesado en los términos del art. 90 del CPCCN, dada la pretensión cautelar de la actora y el alcance y los efectos del acto provisoriamente suspendido.

Refiere que el escrito inicial da cuenta de una vinculación directa, inmediata y necesaria entre el objeto del amparo y la continuidad del convenio celebrado el 27/12/2000 entre EDENOR y la Municipalidad actora, para la percepción de la Tasa de Servicios Generales y que dicho municipio identifica la continuidad de la vigencia de la Resolución 267/2024 con la imposibilidad de continuar con el citado convenio.

Indica que la legitimación pasiva de EDENOR no requiere de mayor análisis y considera que la empresa tiene derecho a ser oída antes del dictado de cualquier resolución judicial que proyecte sus efectos sobre su actividad.

Seguidamente, efectúa manifestaciones respecto de la percepción de las tasas municipales en las facturas a través del convenio homologado por el ENRE.





Poder Judicial de la Nación

## JUZGADO FEDERAL DE CAMPANA

Arguye que las disposiciones de las leyes provinciales 10.740 y 11.769 son exclusivamente aplicables a los prestadores del servicio público de la jurisdicción provincial y que las mismas nunca podrían interferir con la regulación federal. Que la circunstancia de que EDENOR preste un servicio público interprovincial, conlleva que sus prestaciones son ajenas a la competencia provincial o municipal, como así también ajenas a la competencia de tribunales locales provinciales, en virtud de lo dispuesto en el art. 64 de la Ley 24.240.

Expone que el 08/10/2024 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución ENRE 708/2024 de la que surge con claridad que se dejaba sin efecto toda autorización que haya sido otorgada por el Ente en orden a que se incluyan en las facturas que emiten EDENOR S.A. y EDESUR S.A. conceptos a cobrar ajenos a la prestación del servicio

Apunta que como consecuencia de dicha disposición comunicó a la Municipalidad de Pilar la imposibilidad de continuar cumpliendo con el convenio.

Finalmente solicitó que se garantice su plena participación en el ámbito del proceso en resguardo del derecho de defensa e hizo reserva de interponer todas las defensas y acciones que se vinculen con sus derechos, incluyendo el caso federal.

6. A fojas 423/434 se presenta LOGICA ASOCIACIÓN CIVIL, en carácter de “Amigo del Tribunal” con el fin de exponer una opinión fundada jurídica y técnica para la correcta resolución de la controversia, admitiéndose a fojas 437 su intervención como Amicus Curiae, teniendo presente informe brindado.

7. A fojas 465 se dicta sentencia interlocutoria haciendo lugar, en el punto I, a la intervención de EDENOR SA como tercero voluntario en los términos del artículo 90, inciso 1 del CPCCN, encontrándose dicho punto firme ya que no ha sido objeto de apelación por las partes.

8. A fojas 645 se abre la causa a prueba, y a fojas 724, ante el desistimiento formulado por la actora, se clausura el período probatorio y se



ordena correr vista al Fiscal Federal para que se expida respecto de la inconstitucionalidades planteadas.

9. Contestada la vista conferida mediante escrito agregado precedentemente, quedan las presentes en condiciones de resolver.

### **CONSIDERANDO:**

§I.- En primer término, corresponde señalar que la vía excepcional elegida procede contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que, en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, los derechos o garantías explícita o implícitamente reconocidas por la Constitución Nacional, un tratado o una ley (Art. 43 de la Constitución Nacional y Arts. 1 y 2 de la ley 16986). En definitiva, la admisibilidad de la acción de amparo está dada por la existencia de una lesión o restricción que pueda ser adjetivada como ilegítima (arbitraria o ilegal) y que se presente en forma manifiesta (Art. 43 de la Constitución Nacional).

Cabe destacar el contenido específico de los tratados internacionales incorporados con jerarquía constitucional en la reforma del año 1994 (Art. 75, Inciso 22, de la Constitución Nacional), en tanto y en cuanto evocan la necesidad de conceder a todas las personas que lo reclamen un procedimiento judicial rápido, breve y efectivo que ampare o resguarde los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente frente a todo acto que pueda violarlos (Art. 25 del Pacto de San José de Costa Rica; Art. 28 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; y Art. 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos).

Asimismo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene que, frente a la ocurrencia de actos que afecten derechos fundamentales, corresponde que los jueces restablezcan inmediatamente el derecho restringido por la vía pronta del amparo, sin remitir el examen de la cuestión a los procedimientos ordinarios (CSJN., Fallos 252:64 y 262:475, entre otros). En este sentido, el Máximo Tribunal ha resuelto que: "siempre







Poder Judicial de la Nación

## JUZGADO FEDERAL DE CAMPANA

que aparezca de manera clara y manifiesta la ilegitimidad de una restricción cualquiera a alguno de los derechos esenciales de las personas, así como el daño grave e irreparable que causaría remitiendo el examen de la cuestión a los procedimientos administrativos o judiciales, corresponderá que los jueces restablezcan de inmediato el derecho restringido por la vía rápida del amparo". (CSJN., "Arenzon", Fallos 306:400).

Además, el Máximo Tribunal tiene dicho que el amparo constituye un proceso excepcional sólo utilizable en las más delicadas y extremas situaciones en las que, por carencia de otras vías aptas, peligra la salvaguarda de derechos fundamentales y exige, para su apertura, circunstancias muy particulares, caracterizadas por la presencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, de modo tal que las deficiencias referidas, a las que alude la ley 16.986 y la jurisprudencia anterior y posterior a su sanción, requieren que la lesión de los derechos o garantías reconocidos por la Constitución Nacional resulte del acto u omisión de la autoridad pública en forma clara e inequívoca, sin necesidad de un largo y profundo estudio de los hechos ni de un amplio debate y prueba (CSJN., Fallos 301:1060; 306:1253 y 307:747).

Así, la ilegalidad invocada debe manifestarse en forma notoria, siendo insuficiente alegar una conducta estatal cuestionable, resultando necesario que se afecte o restrinja algún derecho constitucional y además, que el acto se encuentre desprovisto de todo sustento normativo que le permita tener efectos válidos.

Conforme lo dispone el art. 1 de nuestra ley fundamental, la Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal, lo que implica, de acuerdo al principio de división de poderes, que el órgano encargado de velar por el debido acatamiento de la Carta Magna es el Poder Judicial. En este sentido, es inherente a la función jurisdiccional el establecer la necesaria adecuación de las leyes para evitar toda violación a los derechos y garantías que ella protege.

El deber judicial de controlar la supremacía de la Constitución Nacional tiene por objeto desplazar las normas jurídicas que la vulneran, a



cuyo efecto existe la posibilidad de declararlas inconstitucionales (art. 116 de la Constitución Nacional).

De este modo, dada la celeridad que es propia de este tipo de proceso, la arbitrariedad o ilegalidad alegada debe presentarse, tal como se sostuvo en párrafos previos, sin necesidad de mayor debate y prueba. Esto es, el juez debe advertir, sin asomo de duda, que se encuentra frente a una situación palmariamente ilegal o resultante de una irrazonable voluntad del sujeto demandado, en razón de que el amparo es un proceso sumamente simplificado en sus dimensiones temporales y formales, pues la finalidad fundamental de la pretensión que constituye su objeto, consiste en reparar, con la mayor premura, la lesión de un derecho reconocido en la Constitución Nacional, un Instrumento Internacional o una Ley (Conf. Palacio, Lino Enrique, “Derecho Procesal Civil”, T. VII, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2005, p. 137).

Por otro lado, no puede soslayarse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, también sostuvo que si bien esta acción no está destinada a reemplazar los medios ordinarios para la solución de controversia, su exclusión no puede fundarse en una apreciación meramente ritual e insuficiente de las alegaciones de las partes, toda vez que la acción de amparo tiene por objeto una efectiva protección de derechos más que una ordenación o resguardo de competencias (CSJN, Fallos 329:4741). Ello, atendiendo que la vía del amparo resulta idónea para prevenir o impedir lesiones de derechos con base institucional (CSJN., Fallos 317:1224).

§II. Sentado ello, deviene necesario señalar que en la demanda se pretende la inconstitucionalidad de la Resolución Nro. 267/2024 (RESOL-2024-267-APN-SIYC#MEC) dictada en fecha 11/09/2024 por el Ministerio de Economía de la Nación - Secretaria de Industria y Comercio, en tanto estableció: “ARTÍCULO 1º: La información relacionada con los conceptos contenidos en los comprobantes emitidos por los proveedores de bienes y servicios en el marco de las relaciones de consumo, conforme las denomina el Artículo 3º de la Ley N° 24.240 y sus modificatorias, deberán referirse en forma única y exclusiva al bien o servicio contratado específicamente por el





Poder Judicial de la Nación

## JUZGADO FEDERAL DE CAMPANA

consumidor y suministrado por el proveedor, no pudiendo contener sumas o conceptos ajenos a dicho bien o servicio, sin perjuicio de toda otra información de carácter general que corresponda incluir en el documento emitido, conforme a la norma aplicable. ARTÍCULO 2º: El incumplimiento a lo establecido en la presente resolución será pasible de ser sancionado conforme el régimen de penalidades previsto en la Ley N° 24.240 y sus modificatorias, y normas reglamentarias.”

En consecuencia, sobre la base de las consideraciones realizadas en el punto anterior, y teniendo presente que la demanda que motivó la formación de este expediente pretende la declaración de inconstitucionalidad de una resolución ministerial, en el entendimiento que con su dictado el Estado Nacional ha vulnerado los principios de autonomía municipal, en directa relación con las facultades de la comuna de Escobar, no puede más que concluirse que la vía elegida resulta procedente, en tanto se encuentran reunidos los extremos requeridos por la Ley Nro. 16.986.

Frente al conflicto normativo descripto, el eje de la discusión de estos autos consiste en definir los alcances de la autonomía municipal previstos en la Constitución Nacional; y sobre tales bases si el Estado Nacional - Ministerio de Economía, cuenta con facultades para interponerse e injerir sobre la información contenida en las facturas relacionadas con las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, en la comuna de Pilar, del modo en que lo hizo.

§III. En relación a la Tasa por Vigilancia, Inspección y Desarrollo de Emprendimientos para la Provisión del Servicio Público de Gas por Redes, creada en el 2009 mediante la ordenanza fiscal de ese año, se encuentra acreditado en autos que, en el marco de la Ordenanza Fiscal 2024, dicha tasa será abonada en forma solidaria por a) los titulares de dominio de los inmuebles; b) los usufructuarios de los inmuebles; c) los poseedores a título de dueño de los inmuebles; y d) los tenedores u ocupantes de los inmuebles por cualquier título, siempre que cuenten con el servicio de gas



natural (art. 270) y que el pago de la misma se efectuará conjuntamente con el recibo/factura emitido por las empresas prestadoras del servicio de gas natural, los cuales actuarán de agentes de retención del tributo (art. 271)

A partir de allí, se ha designado a la firma NATURGY BAN S.A. como agente de retención.

Respecto a la Tasa de Alumbrado Público, la Ley Provincial Nro. 10.740 en su art. 1 establece que: “Las Empresas prestadoras del Servicio Público de Electricidad, en la Provincia de Buenos Aires, deberán percibir, a solicitud y en representación de las Municipalidades, la Tasa por Alumbrado Público que éstas fijen en su jurisdicción, de acuerdo a la Ley Orgánica de las Municipalidades.” En su art. 2 impone la necesidad de firmar un convenio con las empresas prestatarias del servicio.

En este sentido, la Municipalidad actora suscribió un convenio con EDENOR S.A. a través del cual le encomienda y otorga mandato para incluir en las facturas y avisos de pago por consumos de energía eléctrica y a percibir en su representación en forma total o parcial la misma (ver cláusula primera del acuerdo suscripto el 27/12/2000, autorizado por Ordenanza 75/00 promulgada por Decreto 1512/00, obrante en la documental acompañada con la demanda).

En consonancia con ello, la Ley Provincial Nro. 11.769 (que establece el marco regulatorio del sector eléctrico provincial: transporte, distribución, energía, concesionarios, tarifas, electricidad, control judicial, usuarios), en su art. 78 dispone que: “Las facturas a usuarios por la prestación del servicio público de distribución de electricidad deberán detallar la información necesaria y suficiente que permita constatar al usuario en forma unívoca el valor de las magnitudes físicas consumidas, el período al cual corresponde, los precios unitarios aplicados y las cargas impositivas” (...) “Podrán incluirse en las facturas conceptos ajenos a la prestación del servicio público, cuando tal procedimiento hubiera sido expresa e individualmente autorizado por el usuario y aprobado por el Organismo de Control y siempre que se permita el pago por separado de los importes debidos exclusivamente a la prestación del suministro eléctrico.”





Poder Judicial de la Nación

## JUZGADO FEDERAL DE CAMPANA

(...) “Podrá ser incluido en las facturas, como concepto de prestación de servicios, el consumo, medido por alumbrado público. La falta de pago de cualquier concepto ajeno al precio de la energía consumida por el usuario y los cargos que correspondan de acuerdo con el párrafo primero del presente artículo, no podrá constituir causal de incumplimiento habilitante para la interrupción o desconexión del suministro a dicho usuario.”

Por su parte, la Resolución Nro. 167/2018 dictada por el Organismo de Control de Energía Eléctrica (OCEBA) ordena: “a los distribuidores provinciales y municipales que, las facturas a usuarios que se emitan, a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente, no podrán incorporar conceptos ajenos a la prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica, ni conceptos adicionales vinculados al servicio público de distribución de energía eléctrica, sin la previa aprobación del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA), con excepción de lo dispuesto por la Ley N° 10.740 con relación al alumbrado público”. (Art. 2).

La Ley Nro. 10.740 establece que: “Las empresas prestadoras del Servicio Público de Electricidad en la Provincia de Buenos Aires, deberán percibir, a solicitud y en representación de las Municipalidades, la Tasa por Alumbrado Público que éstas fijen en su jurisdicción, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades”. El Art. 4 de la norma prescribe la clara información que el usuario debe recibir en su facturación, separando ambos rubros.

Hasta aquí entonces, el mecanismo de percepción de las tasas en cuestión que se viene llevando a cabo en la actualidad, resulta coherente y congruente con el marco normativo descripto en tanto, además, de ambas boletas surge la separación por rubro exigida.

Cabe recordar que desde su texto originario la Constitución Nacional consagró la institución municipal como parte integrante de la organización política federal, ordenando a las provincias el aseguramiento de su régimen (Art. 5). Nuestra Carta Magna establece que cada provincia dictará su propia Constitución bajo el sistema representativo republicano, de



acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero (Arts. 5 y 123).

En mérito a ello, la Constitución Nacional reserva a los gobiernos provinciales todos los poderes no delegados (art. 121) y determina expresamente que cada provincia debe garantizar, entre otras cosas, la autonomía municipal. La Constitución de la Provincia de Buenos Aires autoriza a los municipios a dictar ordenanzas y reglamentos, dentro de las atribuciones que le confiere, y a votar anualmente su presupuesto y los recursos para costearlo.

Al respecto, el Decreto Ley Nro. 6769/58 (Ley Orgánica de las Municipalidades) establece en su art. 226 lo siguiente: “Constituyen recursos municipales los siguientes impuestos, tasas, derechos, licencias, contribuciones, retribuciones de servicios y rentas: 1° Alumbrado, limpieza, riego y barrido con excepción de los casos en que la prestación se haga efectiva sobre inmuebles pertenecientes al dominio de la Provincia, destinados a servicios educativos, de salud, de justicia y de seguridad.” (...) e Inciso 32°: “Cualquier otra contribución, tasa, derecho o gravamen que imponga la Municipalidad con arreglo a las disposiciones de la Constitución.”

Seguidamente, el art. 228 dispone: “La percepción de impuestos municipales es legítima en virtud de la satisfacción de las necesidades colectivas que con ella se procura. Los órganos del gobierno municipal tienen por lo tanto amplias atribuciones para especificar los gastos que deban pagarse con el producto de aquellos impuestos, sin más limitaciones que las que resultan de la aplicación de los mismos a la atención de las aludidas necesidades colectivas. En esta materia, las facultades del gobierno municipal son irrenunciables e intransferibles y en consecuencia, ninguna autoridad podrá imponer a las comunas gastos que ellas mismas no hayan autorizado, ni privarlas del derecho de invertir sus recursos en la forma que dispongan sus poderes legalmente constituidos.”





Poder Judicial de la Nación

## JUZGADO FEDERAL DE CAMPANA

En este orden de ideas, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación trazó la regla según la cual las leyes provinciales no solo deben imperativamente establecer los municipios, sino que no pueden privarlos de las atribuciones mínimas necesarias para desempeñar su cometido, **pues si los municipios se encontrasen sujetos en esos aspectos a las decisiones de una autoridad extraña, esta podría impedirles desarrollar su acción específica, mediante diversas restricciones o imposiciones capaces de desarticular las bases de su organización funcional** (CSJN, Fallos: 312:326 y 314:495, el resaltado corresponde al suscripto).

En esa misma línea, la reforma constitucional del año 1994 consagró expresamente la autonomía municipal, despejando todo margen de duda acerca de la naturaleza y ubicación institucional de los municipios en el ámbito federal de la República. Con la incorporación del art. 123 en la Constitución Nacional se reconoció a dichas entidades autonomía, confiriendo a las provincias la atribución de reglamentar, sin desnaturalizar, su alcance. Con ello, se intenta fortalecer el federalismo, acentuar la expresión democrática de la ciudadanía, reconocer la tradición histórica de las instituciones más próximas a los vecinos y lograr una mayor eficiencia en el ejercicio de la administración pública. De esta forma, la Constitución Nacional inserta al municipio en la vida política del país.

Incorporar a la autonomía municipal en el texto constitucional consagra un valor interpretativo uniforme en todo el territorio nacional, pero en modo alguno significa decir que todos los municipios del país deben tener las mismas competencias. Es tarea de cada provincia, atendiendo a su específica realidad, encuadrar las comunidades locales dentro del parámetro señalado (Rossatti, Horacio, Tratado de Derecho Constitucional, T.II, 2da. Ed. Santa Fe, Rubin-Culzoni, 2017, p. 617). Es decir, se estableció que las constituciones provinciales debían materializar el mandato de autonomía en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero.

Esta caracterización del término “autonomía” se ve definida, además, con lo sostenido en la convención reformadora: “una autonomía que no contenga esta característica (...) no sería una real autonomía



municipal y solo quedaría reducida a un simple formula literaria grandilocuente pero, en la práctica, vacía de contenido porque no puede haber municipio autónomo verdadero si no le reconocemos explícitamente entidad política o le retaceamos la capacidad de organizar su administración y realizar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones o los privamos del sustento económico-financiero indispensable para que preste aquellos servicios públicos que la provincia le asigne, inherentes a su existencia o le impedimos ejercer su autonomía institucional.” (Convención Constituyente Nacional, sesión del 8 de agosto de 1994, intervención del Convencional Merlo).

En cuanto a los alcances de cada contenido autonómico, ellos deben reflejar la heterogeneidad ínsita en todo régimen federal y por tanto ser fijados por cada provincia, atendiendo a las diferencias observables en la escala de vida vecinal a lo largo y ancho del territorio nacional, con el debido respeto de lo dispuesto por los Arts. 5 y 123 de la Constitución Nacional. En esta forma, conforme se describió en párrafos previos, resultaría ilógico e irrazonable que desde la norma constitucional federal se impusiera a las provincias un determinado y uniforme alcance del régimen municipal que iguale a municipios urbanos o rurales, densamente poblados o con pocos vecinos, longevos o nuevos, con perfil sociocultural predominantemente cosmopolita o tradicional, etc. **Esto explica que el constituyente reformador haya diferido a cada provincia la específica delimitación de los alcances de cada contenido autonómico, para que en ejercicio del respectivo “margen de apreciación local” sea cada jurisdicción la que defina el standard jurídico conforme su específica e intransferible realidad** (CSJN. Fallos: 343:580, voto de los jueces Maqueda y Rosatti, considerando 9º, el resaltado corresponde al suscripto).

En este orden de ideas, la Constitución Nacional no contiene prohibición alguna para restringir el poder tributario de los municipios. De forma tal que, respetando la distribución establecida constitucionalmente, pueden establecer impuestos, tasas y contribuciones especiales.







Poder Judicial de la Nación

## JUZGADO FEDERAL DE CAMPANA

La Resolución Nro. 267/2024 dictada por el Ministerio de Economía de la Nación - Secretaría de Industria y Comercio, aunque no refiere expresamente a los gobiernos locales, les impide una modalidad de cobro de las tasas municipales adheridas a la facturación de bienes y servicios públicos.

Teniendo en cuenta lo expuesto, fundamentalmente todo cuanto concierne al término “autonomía”, es opinión del suscripto que la aplicación y alcance de semejante concepto no solo faculta la creación de tasas municipales, sino el poder delinear las formas más apropiadas para su percepción, conforme a la regulación de la Provincia y en ejercicio pleno de sus poderes originarios no delegados a la Nación; máxime cuando no se advierte que las tasas municipales incluidas en la factura de los servicios públicos no posean acabada relación con el servicio contratado por parte del usuario: tasa de alumbrado público en el servicio de energía eléctrica y expansión de redes de gas, en la de gas natural.

Como se viene exponiendo, el servicio de energía eléctrica se encuentra regulado principalmente por la Ley Provincial Nro. 11.769, y sus reglamentaciones y normas locales como la ley Nro. 10.710, y su reglamento; y es deber del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA, entidad autárquica creada por la Ley Provincial Nro. 11.769) ejercer el control y la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Marco Regulatorio Eléctrico (MRE) y de los contratos de concesión del servicio público de electricidad en el ámbito de las áreas concesionadas en la Provincia de Buenos Aires.

Así las cosas, la regulación y control del suministro de energía eléctrica y gas en la Provincia de Buenos Aires, tiene un régimen propio por ser una actividad reservada a las Provincias, y como tal se trata de una materia que es de competencia local.

Por otra parte, la demandada funda su posición en los términos de la ley 24.240, norma cuyo objeto concierne a la protección y defensa de los consumidores, sin embargo, no aportó ninguna queja o denuncia formalizada por la persona consumidora o usuaria que dice querer proteger.



#39296985#456049611#20250521081143953

Justamente, la ley en trato protege los derechos de los consumidores, y no surge de autos la existencia de algún reclamo efectuado por un consumidor, o miembro de la comunidad, que permita inferir un rechazo en la forma de percepción materializada por el municipio y las empresas prestatarias de servicios.

En el caso, el procedimiento aplicado para el cobro de las tasas se ve sustentado por los convenios suscriptos entre las partes, las ordenanzas fiscales referidas y el plexo normativo antes citado, todo lo cual admite, asimismo, la elección más idónea para lograr tal cometido. De este modo, no vislumbra el suscripto que el Municipio esté imponiendo de forma coercitiva una modalidad de pago, ya que el contribuyente cuenta con la potestad de optar por la vía establecida normativamente.

En efecto, la legislatura provincial es el órgano que ejerce el poder legislativo provincial, único poder facultado para modificar o abrogar normas con rango de ley. En todo caso, sí se podrá exigir el cumplimiento de una ley o dictar disposiciones complementarias que faciliten su aplicación.

Los municipios deben disponer de recursos propios, con la consiguiente facultad de percibir y reglamentar sus tributos, y de aplicar el mecanismo que considere adecuado para su percepción. Si ello les fuera negado o coartado, no podría hablarse de una real autonomía municipal, en los términos analizados en párrafos previos.

Por todo lo expuesto y oído el Sr. Fiscal Federal, corresponde y así

**RESUELVO:**

I. Hacer lugar a la acción de amparo deducida por la Municipalidad de Pilar, y declarar la inconstitucionalidad de la Resolución Nro. 267/2024 (RESOL-2024-267-APN-SIYC#MEC) dictada en fecha 11/09/2024 por el Ministerio de Economía de la Nación - Secretaria de Industria y Comercio, en relación particular al Municipio de Pilar.

II. Imponer costas a la vencida (art. 14 de la ley 16.986).





Poder Judicial de la Nación

## JUZGADO FEDERAL DE CAMPANA

III. Teniendo presente la labor realizada ante esta instancia, el objeto procesal, el resultado obtenido y las etapas procesales cumplidas, se regulan los honorarios del letrado apoderado de la parte actora, Dr. Leonardo Luis Pastor, en la suma de Pesos un millón trescientos setenta y nueve mil setecientos (\$1.379.700.-), equivalentes a 20 UMA, con valor a la fecha de \$68.985.- por unidad (conf. art. 48, último párrafo, de la ley 27.423, Ac. CSJN 30/2023 y Resol. SGA 580/2025) Al monto regulado se deberá adicionar el diez por ciento (10%) en concepto de aportes a cargo de la obligada al pago fijado por el artículo 14 de la Ley local 6716, aplicable al fuero por la Ley 23.987, debiendo oportunamente el letrado, acreditar el depósito del porcentaje a su cargo bajo apercibimiento de Ley (conf. art. 12 de la citada ley). La retribución establecida precedentemente no incluye el impuesto al valor agregado suma que, en su caso, deberá ser adicionada conforme la subjetiva situación de la profesional respecto al referido tributo. Hágase saber que la cantidad establecida en concepto de honorarios, lo es al día de la presente resolución, que si la misma no es abonada en el plazo de diez días se adicionarán intereses aplicando la tasa pasiva del Banco de la Nación Argentina (conf. art. 54 de la Ley Arancelaria), y que se considerará cancelada si se abona la cantidad de UMA fijada al valor vigente al momento del pago (conf. art. 51 Ley 27.423)

IV. Previo a regular los honorarios de los apoderados de la demandada, y del tercero, los mismos deberán manifestar si se encuentran alcanzados por las disposiciones del artículo 2 de la ley arancelaria, en el plazo de cinco (5) días, bajo apercibimiento de considerarlos incluidos en tal supuesto y oportunamente archivar de las actuaciones sin regular sus emolumentos. Ello, atento el resultado del pleito y el carácter dado a la intervención del tercero.

V. Regístrese y notifíquese electrónicamente a la actora, a la demandada y al Fiscal Federal.

Asimismo, para su conocimiento, comuníquese electrónicamente a EDENOR, al ENRE, al ENARGAS, a Lógica Asociación Civil y a Naturgy BAN SA mediante oficio DEOX.



VI. Oportunamente archívese.

HMJ



#39296985#456049611#20250521081143953